

CHILE ESTÁ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INVERSIÓN EN LA MATERIA:

La fragilidad financiera y de gestión en los parques nacionales que develó la tragedia en Torres del Paine

Déficit de infraestructura y personal debido a constantes recortes presupuestarios es parte de las falencias del sistema de administración que, según el sector turístico, no está a la altura de los estándares que requiere un destino mundial de la naturaleza.



AFP

El Parque Nacional Torres del Paine es el responsable de más de la mitad de los ingresos que generan este tipo de recintos en el país.

JOAQUÍN AGUILERA R.

El Parque Nacional Torres del Paine tuvo más de 250.000 visitantes de Chile y el mundo entre enero y septiembre, un incremento de 29% respecto de 2019, último año antes de que la pandemia impactara en los flujos turísticos a nivel global. Por sí sola, esta área protegida aporta el 60% de todos los ingresos que destinan los parques nacionales a las arcas fiscales, en un país reconocido globalmente —por ejemplo, en los llamados Óscar del Turismo— por sus destinos con paisajes naturales. Sin embargo, “opera bajo un sistema de administración que no está a la altura de los estándares de un

destino de naturaleza de clase mundial”, reclama Mónica Zalaquett, presidenta de uno de los principales gremios del turismo en el país, Fedetur.

Esta semana, un trágico accidente terminó con la vida de cinco turistas que se extraviaron durante un recorrido por el parque en medio de condiciones meteorológicas adversas. Cuando sucedió, no había un guardaparques en el sector, lo que según la mirada de la industria del turismo solo deja en evidencia una de las tantas falencias que hoy tienen a este y todos los parques nacionales en una frágil situación institucional: “Falta de personal en terreno, señaliza-

Fragilidad institucional en los parques

VIENE DE **B1**

ción insuficiente, débil capacidad de fiscalización, protocolos que no siempre se actualizan con la rapidez necesaria y recursos limitados para anticipar, prevenir y manejar situaciones de riesgo” son algunas de esas debilidades, dice la secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas del Turismo, Lorena Arriagada.

La gestión de la red de 46 parques nacionales en el territorio nacional recae sobre la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que en total administra 110 áreas silvestres protegidas, sumando 45 reservas nacionales y 19 monumentos naturales. Suman 18,8 millones de hectáreas, equivalente al 21% del territorio nacional. Ahora, esta tarea se traspasará al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y se encuentra en plena implementación.

Problema presupuestario

Desde el punto de vista de los expertos, el problema es esencialmente de recursos públicos. Si bien Conaf opera bajo un modelo de concesiones, estos contratos se enfocan más bien en los servicios de diversa índole que se prestan al interior de los parques nacionales, pero la administración central corresponde al Estado.

Solo este año, la Ley de Presupuestos 2026 plantea un recorte de 27% en los recursos para el Programa de Promoción Turística Internacional, pero no se trata de un reajuste puntual. “El 2023 y el 2024, las disminuciones de presupuesto han sido del orden del 20% o 21% en relación al año anterior”, recuerda Pablo Rebolledo, exencargado de Áreas Silvestres en la Subsecretaría de Turismo —durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet— y director de Administración en Ecoturismo UNAB. La realidad objetiva, dice, es que “Chile está entre los 10 países del mundo que menos financiamiento por hectárea protegida aportan. Está al mismo nivel de fi-

nanciamiento de hectárea protegida que Irak, que Angola”.

“El guardaparque que está hoy, que normalmente es el más criticado, tiene un contrato que es para la conservación de la biodiversidad y termina limpiando el baño, estacionando los autos, trabajando de cajero, cambiando la ampolleta; a veces los asaltan”, describe.

Más allá del presupuesto, la gerenta del gremio de Hoteles y Servicios Turísticos (HYST) de Torres del Paine, Sara Adema, comenta que tampoco hay una administración eficiente de los recursos: “Imagina lo que podríamos llegar y lograr hacer si acaso solo el 10% quedara en la región (...). Estamos brindando un servicio de turismo a nivel mundial, en manos de una entidad a la que no le compete el turismo”.

¿Foco en turismo?

Conaf concesionó buena parte de los servicios que requieren los parques para funcionar, como hoteles o refugios, e incluso la venta de entradas, que desde este año recae sobre Chiletur, de Empresas Copec. La firma declinó detallar el modelo mediante el cual operan la venta de entradas.

Rebolledo, de la UNAB, cree que la dispersión de distintas concesiones a nivel nacional es un problema en sí mismo. “Lo que hacen en algunos contratos es que pagan la concesión en bienes y servicios; por ejemplo, compran bencina, reparan una caseta de observación de aves, capacitan a la gente. Pero también podría, por ejemplo, financiar el sueldo de un ayudante de guardaparque durante el verano, mejorar la señalética, mejorar el camino, construir un refugio de emergencia”, propone.

Sara Adema, de HYST, es escéptica: “Lamentablemente, no tenemos una buena experiencia de cómo se está implementando el SBAP (...). Vamos a estar en marzo recién con un traspaso de lo que es Conaf al SBAP, en un limbo. Hay concesiones que vencen ahora en abril del 2026, y nadie se hace cargo de ellas”.